

Movimiento vecinal: Claroscuros de una lucha necesaria

Author(s): Albert Recio and Andrés Naya

Source: *Mientras Tanto*, No. 91/92, 25 AÑOS DE MOVIMIENTOS SOCIALES (Verano-Otoño 2004), pp. 63-81

Published by: Ediciones de Intervención Cultural

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/27820758>

Accessed: 15-02-2022 09:04 UTC

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



JSTOR

Ediciones de Intervención Cultural is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Mientras Tanto*

Movimiento vecinal: Claroscuros de una lucha necesaria

ALBERT RECIO Y ANDRÉS NAYA¹

El nacimiento del movimiento vecinal en el tardofranquismo

El movimiento vecinal fue, junto al movimiento obrero, uno de los principales movimientos sociales de base de la transición al postfranquismo. Había diversas razones para que ello fuera así.

En primer lugar, las condiciones materiales de la mayoría de barrios creaban una situación objetiva de conflicto social. El nulo desarrollo de políticas sociales del franquismo, unido a sus políticas de urbanismo salvaje generaba tan elevado nivel de carencias que constituían una fuente permanente de reivindicaciones de todo tipo. Ello era especialmente relevante en los barrios de clase obrera. En esos barrios, erigidos en las periferias de las grandes ciudades al calor de los procesos migratorios generados por el desarrollismo, había grandes necesidades de vivienda. El desarrollo urbano marcado por la especulación ampliamente permitida por las autoridades, se traducía en la pervivencia de barraquismo vertical y horizontal, barrios de autoconstrucción, zonas de vivienda pública pensadas como espacios de control social, ausencia de equipamientos y calidad urbanística (lo cual, dicho sea de paso, muestra que la especulación no es sólo un problema contemporáneo sino que forma parte de la esencia misma del capitalismo español). En este contexto de carencias de toda índole fue, pues, relativamente fácil el surgimiento de una

1. Aunque tratamos de presentar una visión general, nuestra perspectiva, en un movimiento tan descentralizado, tiene sin duda algo de local, centrada en nuestra experiencia de Barcelona. No tratamos de hacer un «mapa» del movimiento, sino de destacar los aspectos que consideramos más relevantes para entender su dinámica y para animar la reflexión sobre el futuro.

respuesta social con objetivos muy diversos: demanda de equipamientos de toda clase (ambulatorios, escuelas e institutos), zonas verdes, asfaltado de calles, lucha contra el barraquismo, oposición a nuevas agresiones urbanísticas, lucha contra la contaminación, etcétera.

En segundo lugar, el tardofranquismo al legalizar las Asociaciones de Vecinos había abierto un espacio que podía ser utilizado por los activistas políticos para llegar más directamente a la población. La propia organización de las demandas sociales y la represión que en muchos casos se producía cuando éstas se convertían en acciones de protesta (incluidas muertes de manifestantes²) ayudaba a politizar las luchas sociales y a conectarlas con las demandas más generales de reformas democráticas. No es por causalidad que, por ejemplo, la primera gran manifestación política de la transición (Barcelona, 6 de febrero de 1976) fuera convocada formalmente por la *Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona*, actuando como tapadera de la *Assemblea de Catalunya*. El trabajo en el movimiento vecinal no sólo constituía un medio legal de intervención, también era un espacio en el que podían participar activistas que por las condiciones de sus centros de trabajo o por su procedencia social de clase media tenían dificultades para integrarse en el movimiento obrero parasindical que constituía el núcleo social sobre el que la mayoría de la izquierda pilotaba su intervención. La aportación de personas de clase media, con niveles educativos más elevados, fue útil para ayudar a articular las demandas sociales y conectó en muchos casos al movimiento con técnicos y profesionales que aportaron ideas y asesoramiento.

De todo ello emergió un movimiento social extenso, de base local, que a lo largo de la década de los setenta protagonizó numerosas movilizaciones a lo largo y ancho del país, especialmente en los barrios de clase obrera y que ayudó a generar algunos de los aspectos más positivos de la transición. En particular hizo patente que la consolidación de un nuevo régimen político era imposible si no se garantizaban servicios sociales básicos y no se producía una intervención urbanística que hiciera de los barrios algo más que un continuo de edificios. Por más crítica que puede ser la valoración de la actual democracia hay algunas cuestiones en las que conviene reconocer avances. En primer lugar, un fuerte crecimiento del gasto público que se ha traducido en diversos servicios y prestaciones públicas. Es evidente que su nivel actual es insuficiente y en los últimos años se han producido recortes importantes, especialmente bajo los Gobiernos de Aznar, pero el resultado neto es sin duda positivo si la base de comparación se toma en 1975 o 1980. En segundo

2. Como en el caso de la lucha contra la contaminación en Erandio (1969), la lucha del ambulatorio de Santa Coloma de Gramanet (1971) o la del agua en Parla (1995).

lugar, la mejora urbanística de ciudades y pueblos constituye un elemento básico de la política de prácticamente todos los Ayuntamientos. Sin duda en esta política de reordenación urbanística hay elementos especulativos, de despilfarro público y constituyen una buena oportunidad de negocio para las poderosas empresas de obras públicas, pero resulta igualmente patente que en muchos casos son visibles las mejoras urbanísticas, mejoran las condiciones de vida de la gente y constituyen una de las conquistas colectivas de nuestro pasado reciente. Y a estos dos factores, a la necesidad de legitimar la política por medio de la intervención pública, constituyó esta amplia y diversa movilización de hombres y mujeres en mil y un barrio del país.

La importancia y oportunidad del movimiento vecinal de los setenta no supone que las diferentes corrientes de izquierda tuvieran una percepción clara de cual debería ser su papel en una estrategia de transformación. En muchos casos predominaba una visión instrumental del mismo, mero espacio de intervención con cobertura legal y de agitación para ampliar las contradicciones y conflictos que pudieran llevar a la ruptura democrática o a la revolución socialista (según el radicalismo de los diversos partidos), pero faltaba en muchos casos una reflexión profunda de su papel en un proceso de democratización real.

Para la izquierda reformista la democracia se planteaba a menudo como un punto final del movimiento. Una vez instaurado un régimen democrático desaparecerían las lacras del franquismo (especulación, ausencia de servicios) y dejaría de tener sentido un movimiento contrapuesto a la representación política. Tampoco la izquierda radical era mucho más perspicaz. El obrerismo que dominaba en muchos planteamientos conducía a considerar al movimiento vecinal como un espacio secundario de intervención. En gran medida la propia visión de los barrios obreros como «ciudades dormitorio» inducía a pensar éstos como espacios inertes respecto a un mundo laboral dominado por los espacios del trabajo mercantil. Todo ello impedía tomar en cuenta aspectos básicos de las sociedades capitalistas modernas, importantes a la hora de pensar cualquier proceso de transformación social. En primer lugar, la relación entre desarrollo capitalista y urbanismo en sus diversos aspectos de espacio de valorización, de impacto ambiental, de modelo de organización de la comunidad. En segundo lugar, el olvido sistemático de la base patriarcal sobre la que descansan las sociedades capitalistas reales y la importante contribución del trabajo doméstico realizado básicamente por las mujeres. Los barrios obreros podían ser ciertamente dormitorios desde el punto de vista de los asalariados, especialmente masculinos, pero no para las mujeres que realizaban su intensa actividad cotidiana en este espacio y que, en gran medida fueron las protagonistas de muchas movilizaciones al estar más próximas y conocer mejor las condiciones que daban lugar a los conflictos. Y, en tercer

lugar, existía una subvaloración de la democracia y de las transformaciones parciales, que para algunos constituían una forma de alejarse del objetivo final de la revolución socialista. Desde este punto de vista la lucha vecinal solo tenía sentido como una forma de radicalización social.

Transición democrática y crisis del movimiento vecinal: problemas estructurales

El movimiento vecinal que había sido una de las plataformas más importantes de movilización democrática, con sus demandas de mejora de las condiciones de vida en los barrios y de democratización del poder político entró en crisis a medida que se fue consolidando el nuevo marco político. Si tuviéramos que considerar un punto de inflexión este debería situarse en torno a las primeras elecciones democráticas municipales en 1979.

Se ha dicho muchas veces que se trató de una crisis generada por los partidos con representación institucional que ordenaron a sus militantes el abandono de las asociaciones. Sin negar que en muchos sitios estas consignas existieron las razones de la crisis son más complejas y merecen una lectura más atenta.

En muchos casos este vaciado de cuadros no sólo fue el producto de consignas más o menos maquiavélicas, sino el resultado de procesos relativamente automáticos. El nuevo marco político permitió el acceso a cargos políticos de muchas personas que antes lo tenían vetado. Ni los partidos de izquierdas ni las asociaciones contaban con un número muy grande de cuadros y en muchos pueblos y distritos se produjo un trasvase desde los movimientos a las instituciones que tuvo el doble efecto de burocratizar a los antiguos luchadores y dejar en mantillas a muchas entidades de barrio. Para muchas personas el ocupar plazas de responsabilidad en los Ayuntamientos era una forma natural de poner en práctica las ideas políticas por las que habían luchado desde abajo. Y es posible que los más egocéntricos pensaran que puesto que ellos ya se ocupaban del pueblo, éste no necesitaba una organización autónoma. Después, cuando la complejidad de la gestión municipal, las presiones de los lobbies de poder a escala local y general (promotores inmobiliarios, bancos, empresas de servicios), el acomodamiento ideológico y la corrupción moral que casi siempre provoca el detentar algún poder, evaporará gran parte de su radicalismo juvenil, los gestores municipales acabaron por considerar como un peligro un potente movimiento vecinal autónomo y ciertamente hicieron numerosas y variadas acciones para debilitarlo, subordinarlo o neutralizarlo.

Así pues, la sangría de activistas no sólo fue el producto de las consignas políticas y la cooptación, sino también el resultado del abandono voluntario

de muchas personas que abandonaron su participación pública. En parte desencantados al comprobar que no tenían lugar los cambios radicales que habían supuesto que iba a traer el cambio político y particularmente «quemados» al constatar la poca eficacia y falta de respuestas de los primeros ayuntamientos y sus intentos por utilizar las asociaciones como un «colchón» ante el barrio.

Pero con ser importante este proceso no lo explica todo. Otros factores merecen consideración. En primer lugar, la propia instauración de los ayuntamientos democráticos y la expansión progresiva del gasto público cambiaron progresivamente el escenario del movimiento vecinal. Si bien en 25 años no se ha alterado el papel central del capital especulativo en la configuración del desarrollo urbanístico, la política de los ayuntamientos democráticos se ha preocupado de mejorar las infraestructuras y promover el embellecimiento del entorno urbano como un medio de legitimación social. La ciudadanía se ha habituado a un estado de obras permanente por parte de la Administración que en parte ha deslegitimado (o como mínimo devaluado) el papel de los movimientos reivindicativos. Aunque éstos renacen a menudo cuando alguna intervención es percibida como una agresión local.

En segundo lugar, cabe aludir a la falta de densidad democrática del país y sus efectos sobre un movimiento organizado. Aún en sus mejores tiempos las Asociaciones de Vecinos estaban formadas por un puñado relativamente corto de activistas (unos 50 en las de mayor base). Otra cosa es que estos núcleos fueran capaces de aglutinar tras de sí a importantes contingentes de personas ante un conflicto concreto. Pero la relación de la ciudadanía de base con los núcleos organizados siempre ha estado atravesada de aspectos contradictorios. La relación de los vecinos con los activistas tiene muchos matices, desde la mitificación (que presenta a los activistas como una especie de «superhombres» locales) hasta la suspicacia (de aquellos que piensan que se trata de funcionarios o de personas que persiguen intereses sospechosos), pasando por el clientelismo o la visión de servidores públicos a los que debe exigirse. Ciertamente, en muchos barrios hay núcleos de personas con mayor visión social, que reconocen el papel de los activistas y participan esporádicamente en tareas organizativas, pero éste suele ser, en muchos casos, un núcleo demasiado reducido y, a veces, no exento de caer en la exaltación papanatas de los líderes. La forma como se gestó la cultura política bajo el franquismo explica buena parte de estas actitudes, pero no cabe duda de que el proceso de consolidación de un marco político de baja intensidad democrática hizo el resto. De ello se deriva una relación bastante instrumental de la mayoría de la ciudadanía con su asociación (se acude a ella para resolver problemas puntuales). Con la consolidación de los Ayuntamientos democráticos este proceso se acelera, al pasarse en muchos casos del conflicto abierto a

formas de negociación que refuerzan el burocratismo de la acción vecinal y un cierto alejamiento de las bases. La falta de medios económicos, y a menudo de capacidades técnicas, ha impedido en muchos casos suplir estas limitaciones con una adecuada política informativa. El resultado de todo ello es que las Asociaciones quedan a menudo con una imagen a medio camino entre el Ayuntamiento y la ciudadanía sin llegar a consolidarse con una imagen plenamente autónoma.

En tercer lugar, en muchos barrios el movimiento vecinal ayudó a generar otros muchos movimientos y actividades que antes no tenían espacio donde desarrollarse. Esta eclosión asociativa tuvo lugar por vías muy diversas. En algunos casos fue el mero producto de la consecución de equipamientos lo que generó la formación de nuevas asociaciones dedicadas a organizar la participación en determinadas áreas (el caso más evidente es la creación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos en los centros escolares). En otros, se trató de nuevos movimientos gestados en muchas Asociaciones que acabaron por independizarse, como es el caso de los movimientos de mujeres de muchos barrios. En este caso, la separación se produjo tanto por la propia dinámica del movimiento como por el machismo de muchos militantes vecinales que generó una difícil convivencia. También destaca la paulatina dedicación de muchos activistas viejos y nuevos a actividades de tipo lúdico-cultural que el nuevo marco de libertades y las instalaciones que poco a poco se configuraban hacían posibles. La aparición de nuevos movimientos de base más juvenil, como el de objeción o el ecologista, simplemente tendió a organizarse fuera de las «viejas asociaciones». En definitiva, en muchos barrios se pasó de una sola entidad, a un tejido asociativo cada vez más complejo y, a menudo, con pocos vínculos. Ello no sólo condujo a hacer más compleja la actividad de los activistas vecinales, si no que a menudo los llevó a la especialización en unas pocas parcelas de actividad (urbanismo, demanda de equipamientos), lo que en muchos casos aceleró su aislamiento de otros sectores sociales, especialmente de las nuevas generaciones. Sólo allí donde existía un fuerte núcleo organizado con capacidad de captar la complejidad de los nuevos tiempos y de mediar en este tejido complejo, el movimiento superó su aislamiento y estuvo en condiciones de generar dinámicas de participación y de lucha a escala local.

En cuarto lugar, y en conexión con lo anterior, hay que destacar las limitaciones políticas de muchos de los activistas locales. Si bien en la transición las Asociaciones llegaron a tener una cierta presencia en todas partes, sin duda era en los barrios obreros donde ésta era mayor y respondía a un conflicto estructural. Por esto un gran número de cuadros del movimiento eran personas de clase obrera, sin un gran bagaje cultural y a menudo con visiones del mundo muy tradicionales. En los tiempos de mayor auge contaron

con un cierto apoyo de técnicos de izquierdas y en bastantes barrios de militantes izquierdistas de clase media atraídos al movimiento como una forma de «llegar a la clase obrera». Todo ello se evaporó con bastante rapidez. Si el sistema político cooptó a algún líder vecinal, en el caso de los técnicos «progres» la captación fue masiva y a menudo las Asociaciones se encontraron sin un asesoramiento solvente. Las pocas formaciones extraparlamentarias que quedaron en pie tendieron a considerar el movimiento vecinal un campo de trabajo poco prometedor para concentrar sus esfuerzos en nuevos movimientos sociales como el pacifismo, el feminismo, el antimilitarismo y, en menor grado, el ecologismo. La gente más politizada del movimiento vecinal fueron los activistas sin partido, con cultura izquierdista pero trabajando de forma independiente. Evidentemente, este proceso no fue ni lineal ni universal, pero en muchos casos dejó a las asociaciones en manos de dirigentes con una formación política limitada, poco propensos a la innovación y con pocos apoyos técnico-políticos a los que agarrarse.

En esta situación el movimiento quedó estructurado en gran medida como una constelación de pequeños núcleos de barrio dedicados a una labor de mediación con la Administración, de organización, a veces de movilizaciones por cuestiones locales y también a menudo como promotoras de actividades lúdico-recreativas como Fiestas Mayores, cursos de diversos tipos, etc. Las formas de intervención, las reivindicaciones, la relación con el resto del tejido social quedaron en gran medida determinadas por las características del núcleo local. Podemos encontrar desde Asociaciones controladas por un solo individuo, que juega en cierta forma de prohombre local (con formas personalistas de gestión y grados diversos de honestidad y clientelismo) hasta el núcleo activista que ha sabido desarrollar una buena relación con el tejido vivo del barrio y ha desarrollado una buena experiencia participativa. El que la situación derive hacia uno u otro modelo extremo ha dependido en gran medida de circunstancias particulares ligadas en parte a la estructura social de los barrios, a la propia historia, etc. Por esto resulta difícil hacer una evaluación global del movimiento vecinal cómo un todo, por cuanto si en algo se ha caracterizado ha sido por una actuación variopinta a escala local.

Una participación truncada

Con todas estas limitaciones, el papel del movimiento vecinal dependía en gran medida de las formas como se articulase la participación social en la elaboración de las políticas públicas, particularmente las políticas locales. Bien pronto estuvo claro que la democracia participativa no formaba parte de los proyectos de la mayoría de partidos parlamentarios. Aun con sus problemas y limitaciones para muchos políticos las Asociaciones eran vistas con

recolo. Durante los primeros años de la transición era habitual que frente a cualquier debate los concejales y sus adláteres nos pasarán por la cara que su poder venía del voto universal lo que parecía legitimarlos para hacer cualquier política que se les antojara. La existencia de un movimiento autónomo, que formulara propuestas y organizara a la población de a pie no formaba parte del proyecto de democracia limitada diseñado en la transición. Las limitaciones a la participación no eran sólo el resultado de los pactos y transacciones que la izquierda tuvo que hacer para garantizar la consolidación del sistema parlamentario, obedecían también a sus propios impulsos autoritarios, a su negativa de ver recortado su poder y papel social para compartirlo con la población de a pie. Prueba de ello es que los intentos de control del movimiento vecinal no sólo fueron obra del PSOE, formaciones más a la izquierda también trataron de controlar, coartar y reducir el peso del movimiento vecinal, con experiencias tan patéticas como la de Madrid donde el Partido Comunista y el Partido del Trabajo llegaron a escindir la Federación de Asociaciones de Vecinos con el objetivo de controlar un aparato afín a sus propuestas.

Más allá de las anécdotas hay varios datos relevantes al respecto. En primer lugar, la negativa a conceder a las Asociaciones de Vecinos el carácter de entidades de interés social que, en cambio, sí se concedió a las mucho más fantasmagóricas Organizaciones de Consumidores.³ Y, en segundo lugar, el retraso y las limitaciones impuestas en las normas de participación de los distintos Ayuntamientos. De hecho, la posibilidad que tienen aún hoy en día las asociaciones y ciudadanos de a pie de participar en las discusiones de Ayuntamientos y distritos está en relación directa con la correlación de fuerzas que establecen algunos movimientos que conservan una cierta potencia.

Las limitaciones a la participación no eran sólo el producto de la ausencia de cultura democrática de la casta política, era y es también el resultado del juego de presiones a que se ven sometidas las instituciones democráticas en el contexto de las sociedades capitalistas. Las ciudades son uno de los espacios en los que se realiza la acumulación de capital. La actividad urbanístico-inmobiliaria, la gestión de servicios públicos o las obras públicas son una fuente de grandes negocios, particularmente en nuestro país, donde la clase capitalista local ha sido menos perseverante en el enriquecimiento a través de la producción industrial y la innovación tecnológica. Los grupos de poder interesados en este tipo de negocios (no sólo los agentes directos

3. En la elaboración de la Constitución fue rechazada la enmienda del senador del Partido Comunista de España, Lorenzo Martín-Retortillo de incluir a las Asociaciones de Vecinos como entidades de «interés social».

del negocio urbano, también las empresas industriales con instalaciones en los núcleos urbanos ansiosas de obtener sustanciosas recalificaciones del suelo industrial) han desarrollado variadas estrategias de presión y persuasión para diseñar políticas urbanas favorables a sus intereses. Las referencias a la creación de empleo y riqueza urbana, la necesidad de renovación de espacios degradados y todo tipo de maniobras propagandísticas (incluyendo las de salvar la economía de los clubes deportivos locales), sin descuidar las diferentes formas de corrupción privada o institucional, o el mero chantaje han acabado por conformar las políticas locales. Y para que muchas de las grandes operaciones vieran la luz era necesario excluir en lo posible la participación democrática de la ciudadanía de las grandes decisiones,⁴ empezando por silenciar las voces que de alguna forma trataban de articular las demandas sociales. Cabe también señalar que en muchos casos los técnicos que participan en la elaboración de proyectos (arquitectos que diseñan obras, consultores diversos) constituyen un factor adicional de bloqueo democrático, por cuanto su visión tecnocrática y, a menudo, la defensa ególatra de «sus» proyectos ve con malos ojos que personas no-expertas participen en la toma de decisiones.⁵

Lo cierto es que mientras que las autoridades democráticas suelen estar dispuestas a entrevistarse, negociar y consensuar proyectos con los «agentes económicos» (un eufemismo para evitar hablar de capitalistas), se han negado no pocas veces a considerar a las entidades vecinales como interlocutores necesarios para discutir los proyectos que afectan a la ciudadanía. Es habitual que, alegando intereses estratégicos o simplemente actuando en la sombra, las asociaciones no tengan acceso a la información sobre los grandes proyectos hasta que ya están maduros. Y este déficit de información y transparencia constituye el primer paso que niega la participación ciudadana. El urbanismo concertado con los grandes promotores se basa precisamente en un tratamiento asimétrico de la participación, abierta a los grupos de poder y limitada a los movimientos sociales de base.

4. Aunque debe tenerse en cuenta que una decisión es «grande o pequeña» según el ámbito espacial considerado: para un determinado barrio la forma que adopte la reconversión de una sola industria puede hipotecar todo su desarrollo posterior.

5. Dos anécdotas de nuestra experiencia activista resumen esta cuestión. Cuando los vecinos de Nou Barris exigíamos la cobertura del Segundo Cinturón al paso por nuestros barrios, José Miguel Abad (entonces teniente de alcalde por el PSUC) nos llamó iletrados y nos recomendó viajar para comprobar que en ningún lugar se hacían cinturones cubiertos (al final conseguimos nuestro empeño y el cinturón cubierto figura entre las obras emblemáticas de la Barcelona olímpica). En otro debate sobre urbanismo el arquitecto Oriol Bohigas nos recordó, en una discusión sobre el diseño de una calle central en nuestro barrio, «ustedes y yo somos de izquierdas, pero entiendan que yo he estudiado».

El trabajo de poner sordina al movimiento vecinal ha venido en parte facilitado por los condicionantes estructurales citados anteriormente. Y ha tenido lugar con fomas diversas. Casi nunca como un ataque frontal porque, a pesar de sus limitaciones, las Asociaciones de Vecinos, siguen teniendo una buena imagen social. Aún hay muchos vecinos y vecinas que guardan el recuerdo de luchas que han permitido mejorar el barrio, y en muchos lugares el movimiento vecinal sigue siendo un espacio desde el que articular la queja, vehicular demandas o simplemente participar de la vida social. En los casos en que hubo una ofensiva directa desde el poder político contra el movimiento vecinal estas se volvieron en contra de sus promotores. Por esto las vías de ataque han sido más indirectas, pero a veces igualmente demoledoras.

Ya hemos hecho referencia a las limitaciones impuestas en las normas de participación. Cuando ésta se ha dado a menudo ha sido burocrática y en general ha eludido la discusión previa de las grandes decisiones. Con frecuencia cuando se llega a discutir de proyectos concretos, ya están elaborados y queda poco margen para introducir cambios. Y cuando los barrios consiguen que se elabore un proyecto racional de actuación, los PERI (Planes Especiales de Reforma Interior), su implementación se demora en el tiempo, o es simplemente ignorada por actuaciones municipales no previstas, lo que genera un clima de frustración y cansancio que son los mejores aliados para el abandono de la militancia vecinal. La otra vía más transitada ha sido la de la cooptación de los líderes vecinales. Una táctica que ha tenido éxito en muchos pueblos y ciudades y que se ha desarrollado por vías diversas. Desde las más inocuas de favorecer la vanidad y explotar la buena fe de muchas personas hasta las más perversas de la «compra» de conciencias con prebendas diversas (incluido a veces la oferta de un puesto de trabajo). En muchos casos, se ha tratado de una transformación paulatina, usando las relaciones públicas y una política de subvenciones selectiva (invitaciones a fiestas y festejos, concesión de ayudas a determinadas actividades lúdico-recreativas) para obtener el apaciguamiento del movimiento. Y en otros, se ha basado en el creciente control de las entidades por militantes del partido en el poder (o atrayendo al partido a algún líder vecinal) con objeto de controlar su dinámica. Y una tercera estrategia que a veces ha resultado exitosa ha constituido simplemente en obviar al movimiento organizado mediante una apelación populista al electorado (por ejemplo montando actos informativo-propagandísticos donde se margina a los activistas) o creando redes de relación con otro tipo de entidades más dóciles a los intereses de los grupos de poder.

Si el movimiento vecinal hubiera contado con una fuerte estructura de apoyo técnico, de reflexión colectiva es posible que estos peligros se hubieran obviado. Pero nunca hubo ni recursos ni capacidad ni voluntad suficiente para llevar a cabo la construcción de un movimiento suficientemente po-

tente a escala nacional y autonómica para llevarlo a cabo. Es evidente que faltaban recursos financieros y humanos (la mayor parte de asesores técnicos que en la transición política se había mostrado muy activa acabó integrándose en su mayoría en la vida profesional mercantil o dedicando sus energías a actividades menos colectivas). Y el movimiento vecinal nunca ha contado con los recursos públicos que ha tenido por ejemplo el movimiento sindical o las organizaciones de consumidores. Pero sí se han generado organismos de coordinación a todas las escalas: federaciones locales, coordinadoras autonómicas y, a nivel estatal, la CAVE (Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de España). Pero estos intentos cupulares tenían otros peligros que posiblemente expliquen por que nunca se llegaron a constituir en una verdadera coordinación del movimiento. Y no está claro que esta ausencia haya sido a la postre tan negativa.

La debilidad de la organización en cada barrio y las demás características indicadas no permitía crear un tipo de organización basada en una fuerte participación y un elevado nivel de elaboración estratégica. En estas condiciones, como de hecho ha ocurrido en muchos casos, las organizaciones supraterritoriales han tendido a estar controladas por militantes de partidos políticos que han tendido a utilizarlas en beneficio de su estrategia. Inicialmente la CAVE estuvo bajo el control del Partido Comunista de España que trató de utilizarla como correa de transmisión de su política. A medida que este partido perdió presencia institucional, su control pasó a gente próxima al Partido Socialista Obrero Español que practicó una política orientada a descafeinar el movimiento. Cuanto mayor ha sido el intento de construir una estructura pesada, con cuadros y auxiliares profesionales, mayores han sido las tendencias acomodaticias por cuanto mayor dependencia se ha generado de las subvenciones públicas, muchas veces a cambio de pleitesías varias. Otras veces, se ha optado por recabar fondos a través de una política de servicios diversos, un espacio propicio a las corruptelas, la ineficacia, y en definitiva, generadora de nuevos problemas financieros. El triste final de la CAVE en una situación de bancarrota total es una buena muestra de adonde llevó una política de «huida hacia delante» para consolidar una estructura burocrática que no cumplía con su función principal, esto es, promover un discurso social progresista y servir de paraguas de las organizaciones de base. Problemas financieros al margen, la construcción de una organización centralizada chocaba a menudo con la oposición de las asociaciones de base, no siempre por una defensa interesada de su autonomía, sino también porque no resultaba funcional a una lucha apegada al terreno, donde la actividad básica se traba en la relación de proximidad. Por esto el hundimiento de la CAVE no ha supuesto el hundimiento del movimiento asociativo. Las redes confederales tienen sin duda debilidades, pero constituyen un buen sistema para seguir apegadas a su propio terreno.

Las coordinadoras locales y regionales han padecido problemas similares: cooptación, instrumentación, burocratismo (por ejemplo, en algunas localidades, el Partido Popular o Convergencia i Unió han promovido sus propias coordinadoras en Ayuntamientos controlados por ellos). Con todo, han representado a menudo mayores posibilidades de intervención al tratarse de organizaciones más próximas y controlables por las asociaciones de base. Cuando ello ha ocurrido el movimiento ha ganado en presencia social al aparecer como un representante autónomo de los intereses ciudadanos.

Y a pesar de los malos tiempos, ha habido movidas

Hasta aquí nuestro análisis ha tratado de explicar la pérdida paulatina de dinamismo que ha tenido el movimiento vecinal desde los «gloriosos setenta» hasta la actualidad. Un cúmulo de dificultades que en muchos casos ha reducido el movimiento a pequeños núcleos de activistas en los barrios. Núcleos con prácticas e ideologías muy diversas que lejos de formar un movimiento homogéneo han dado lugar a experiencias, demandas y movimientos contradictorios. Pero esto no puede llevarnos a perder de vista la importancia social que este modesto movimiento ha tenido a lo largo de los últimos veinticinco años de régimen democrático formal.

Ya hemos señalado su papel crucial en el tardo-franquismo. No tanto porque jugara una función relevante en las maniobras políticas de la transición sino porque puso la mejora urbanística y de los servicios sociales básicos en la agenda de las demandas ineludibles de la democratización del régimen.

Con sus altos y bajos el movimiento ha constituido una fuerza permanente que ha presionado para conseguir mejoras en los barrios. En unos casos apelando a la movilización y a la democratización de las instituciones públicas. En otros, utilizando el camino más tortuoso de un cierto clientelismo y compadreo. Pero, en todos los casos, generando, cuando menos, una presión en forma de mejora urbanística y de implantación de nuevos equipamientos que no está claro que se hubieran llevado a cabo sin esta labor tenaz, entre el «pepito grillo», el «demandante de favores» o el «agitador de masas», que han realizado cientos de hombres y mujeres en muchas partes del territorio.

Las demandas vecinales han sido muy variadas. En ellas ha influido el grado de organización de cada barrio, la ideología y la cultura política de los líderes vecinales y la respuesta de las autoridades. Es difícil resumir brevemente en lo que han consistido estas demandas y luchas con un contenido contradictorio. No se han dado con igual lógica e intensidad en todas partes pero podemos destacar algunas de las líneas de lucha más reiteradas o sobresalientes.

- **Mejoras urbanísticas y equipamientos.** Este es quizás el factor más común y en el que más éxitos se han conseguido (aunque podríamos decir que cualquier reivindicación tarda cuando menos 10 años en conseguirse) y en más de una ocasión pueden tener aspectos ambiguos, al favorecer determinadas operaciones de imagen. Pero en otros muchos casos se han conseguido mejoras sustantivas o se han reducido los impactos negativos de determinados proyectos (por ejemplo la cobertura de las Rondas).
- **Bloqueo de proyectos especulativos.** Mucho menos habituales porque a menudo la magnitud de algunos proyectos y las alianzas entre especuladores, Administración pública y los medios de comunicación es tan fuerte que la movilización no puede ganar. Con todo se han conseguido imponer modificaciones sustanciales que aminoran el impacto (por ejemplo el bloqueo del proyecto Barça 2000 promovido por el Fútbol Club Barcelona sin el éxito que obtuvo el Real Madrid en una operación similar).
- **La lucha por una vivienda digna.** Si bien no se ha podido conseguir que la vivienda sea un bien de promoción pública ni detener las sucesivas escaladas especulativas, hay muchas luchas urbanas en torno a la vivienda: especialmente, en el caso de la rehabilitación de viviendas con problemas (como la larga lucha de los barrios construidos por la franquista Obra Sindical del Hogar o la rehabilitación de los afectados por el problema de la aluminosis), la garantía de viviendas en el mismo barrio para los afectados por obras de remodelación, la oposición al *mobbing* inmobiliario, el planeamiento urbanístico e incluso la promoción de pequeñas cooperativas de vivienda sin ánimo especulativo. Sin duda son campañas modestas ante la magnitud del problema, pero no insignificantes.
- **Lucha por la mejora de servicios públicos y contra las privatizaciones.** Aunque se trata de un terreno en el que a menudo el movimiento vecinal no tiene un espacio reconocido, en muchos barrios se han producido alianzas y acciones de control y mejora de los servicios públicos. La mejora de los transportes públicos ha sido quizás el terreno donde más movilizaciones se han producido, pero no ha sido el único. En algunos barrios hay experiencias interesantes de control de los servicios sanitarios y se han producido movilizaciones contra su privatización. Las asociaciones están también a la cabeza de las demandas de nuevos servicios y equipamientos, en especial los que afectan a la tercera edad.
- **Resistencia a instalaciones indeseadas.** A menudo el tipo de demandas que ha generado más movimiento y pasión. Se trata de una de las cuestiones más complejas. En muchos casos se puede hablar de falta de visión y

egoísmo. De negativa a aceptar que en el barrio se instalen equipamientos de indudable utilidad social pero que son vistos como fuentes de problemas de convivencia (por ejemplo, la instalación de centros de atención a drogodependencias, cárceles, centros de tratamiento de residuos). No pocas veces simplemente se trata de colocarlo en el terreno del vecino (las conocidas respuestas de «no en mi patio trasero»). Pero tampoco puede olvidarse que a menudo las autoridades tratan de colocar determinadas instalaciones en los barrios más pobres y casi nunca se plantean en los barrios de clase media o alta. A veces, incluso, estas instalaciones ocupan el lugar donde se había previsto instalar un equipamiento de barrio. Por esto conviene hilar fino en cada caso a la hora de juzgar estas respuestas

- **Demandas de seguridad.** Ciertamente es otro de los campos donde se han producido experiencias más discutibles y en algunos casos movimientos directamente fascistoides del tipo patrullas vecinales. Pero debe también considerarse que en diversas ocasiones algunos barrios de clase obrera han experimentado situaciones terribles, como el período de expansión del consumo de heroína (con sus secuelas de muerte, desmoralización juvenil, pequeños robos...). La llegada de cientos de inmigrantes pobres a barrios obreros puede generar una nueva oleada de tensiones ligada al aumento de demandas sobre los servicios públicos (escuelas, sanidad, etc.) que en un contexto de congelación del gasto público pueden generar una competencia entre pobres por unos mismos servicios. De aquí que las demandas de más equipamientos y recursos sean cruciales. Pero tampoco en este campo hay respuestas homogéneas. En muchos barrios las respuestas vecinales han ido en la dirección de demandar más servicios y fomento de la convivencia social, aunque en otros casos han prevalecido las demandas represivas.
- **Fomento de actividades lúdicas colectivas.** Desde la organización de Fiestas mayores hasta la realización de cursillos de todo tipo. Son iniciativas con un contenido cultural variable pero que tienen un impacto considerable en la generación de convivencia y sentimiento de comunidad. En muchos casos realizadas con pocos medios y con la competencia de iniciativas del poder político (Centros cívicos municipales, fiestas organizadas desde los Ayuntamientos) que ha encontrado un espacio de legitimación y de relación con el ciudadano de a pie pasando por encima de organizaciones intermedias. En muchos casos, los Ayuntamientos han tenido éxito y han conseguido suplantar al movimiento vecinal o simplemente convertirlo en un apéndice de sus proyectos (un «slogan» típico del PSOE es la busca de complicidad, o sea convertir al movimiento en un brazo cívico a su servicio, en un voluntariado para abaratar costes). Pero también aquí las experiencias son diversas y hay diversos ejemplos de

movimientos vecinales que han sabido crear una buena red de grupos locales que organizan actividades colectivas e incluso que han tomado la gestión de equipamientos públicos con una orientación participativa y alternativa.

- **Demandas de profundización democrática.** Allí donde el poder no ha tenido la capacidad de cooptar al movimiento vecinal, éste ha incluido en sus demandas la profundización de la participación democrática, básicamente a nivel municipal. Esta ha sido de hecho una larga batalla del movimiento, desde la demanda de voz en los plenos municipales hasta exigencias como la elección directa de concejales de distrito en las grandes ciudades o la inclusión preceptiva de una memoria participativa en la elaboración de grandes proyectos. Son, sin duda, exigencias modestas de un movimiento, a pesar de todo, minoritario, pero que han permitido experiencias de profundización democrática allí donde ha habido fuerza y capacidad para actuar. En otro plano, las Asociaciones de Vecinos más avanzadas han constituido a menudo un paraguas de otros movimientos alternativos, desde la lucha pacifista al movimiento okupa o el de los inmigrantes, no sólo prestándoles infraestructura y apoyo sino también evitando su criminalización.

Con enormes desigualdades entre barrios, localidades y comunidades autónomas, se ha mantenido un desigual movimiento que, en unos casos, ha acabado siendo un mero apéndice del poder pero, en otros, ha seguido representando —aunque con menos fuerza que la deseable— una cierta capacidad de alternativa social. Y aun en sus versiones más pobres ha servido, cuando menos, para organizar una voz popular frente al discurso unilateral del poder.

¿Una nueva era para el movimiento vecinal?

En los últimos años se están produciendo cambios que tienen que ver tanto con la emergencia de nuevos movimientos sociales como con nuevas orientaciones en las políticas públicas. El punto de encuentro entre ambas tendencias es el debate sobre la democracia participativa. En gran medida se trata de un mérito de los movimientos altermundistas —en especial del Foro de Porto Alegre— el que la cuestión haya pasado a formar parte del debate político, especialmente a escala municipal. Sin la continuada movilización de parte de la ciudadanía en demanda de más democracia, el tema posiblemente nunca se hubiera planteado. Pero tampoco hay que desdeñar que una parte de la izquierda institucional de este país ha tomado cuenta de la experiencia y, al menos formalmente, está tratando de introducir el tema en sus planteamientos. Lo que unos y otros persiguen es, sin duda, diferente. Para

los movimientos alternativos se trata de conseguir que el control efectivo de las decisiones colectivas pase a la ciudadanía. Lo que pretenden los políticos en ejercicio es más complejo, posiblemente una combinación de nuevas fórmulas para neutralizar a los movimientos sociales, una respuesta a una creciente demanda ciudadana, la búsqueda de nuevos modelos para movilizar a la sociedad en apoyo de los proyectos que ellos elaboran y algunas dosis de buena conciencia y afán de modernidad.

El movimiento vecinal tiene en este proceso una situación particular. En parte ha sido durante años un tenaz defensor de la participación a escala municipal. Allí donde ha sido fuerte ha exigido, y a veces lo ha conseguido, imponer la voz en los plenos municipales (o de distrito). En ciudades como Barcelona ha llegado a introducir sus propias reivindicaciones en los Planes de Actuación Municipal. Pero casi siempre se ha limitado a la definición de los pequeños proyectos, siendo excluido, de forma más o menos abierta, del debate en el diseño de la gran política. Con todo, el movimiento ha conseguido una experiencia no desdeñable, y que es sin duda útil compartir con otros movimientos. La respuesta de los poderes políticos no deja de tener inconvenientes: mientras en algunos casos las nuevas propuestas introducen algunos elementos participativos, en otros más bien parece que se trata de «descafeinar» la participación, especialmente cuando se apelan a formas de participación individual (por ejemplo ciudadanos inscritos a título individual en órganos de participación o determinadas formas de organizar la consulta telemática) confrontada a la participación organizada. Como nos dijo una vez un concejal de nuestro distrito «prefiero discutir con vecinos sin proyecto que con vosotros que tenéis opinión».

En segundo lugar, a muchas Asociaciones de Vecinos se les han planteado nuevos dilemas que apuntan a nuevas formas de organización y participación. En algunos casos, ello ha venido dado por la búsqueda de una nueva participación del vecindario en barrios donde la participación y la movilización estaban bajo mínimos. En muchos otros, las cosas vienen por la parte contraria: por la profusión de nuevas iniciativas en un mismo territorio y la necesidad de articular formas unitarias y de diálogo entre los diferentes agentes.

La respuesta una vez más ha sido diversa en función de cada situación concreta, las características personales y político-culturales de los líderes vecinales, el problema planteado, etc. Una de las respuestas más institucionalizadas ha sido la elaboración de Planes Comunitarios. Su primera experiencia tuvo lugar en el barrio barcelonés de Trinitat Nova y después ha sido extendido a otros muchos lugares. La idea fundamental es la de organizar al conjunto de fuerzas vivas del barrio en la elaboración de planes locales orientados a obje-

tivos específicos (la remodelación urbanística, la revitalización de la vida social, la acogida a los nuevos vecinos...). La novedad que introduce el esquema formalizado es que cuenta con la participación de los gestores públicos de equipamientos de barrio y con «funcionarios profesionales» que trabajan en el día a día del plan. La experiencia es ambigua y merece analizarse. La incorporación de gente con conocimientos técnicos y la profesionalización de algunos activistas contribuye a realizar un trabajo más sostenido que el basado en la habitual militancia vecinal, pero a la vez abre varios peligros no desdeñables: la suplantación de la participación efectiva por el dirigismo de los profesionales (pagados además con fondos públicos y por tanto con posibles servidumbres al poder político), la burocratización del modelo y la sustitución de la movilización reivindicativa por el mero debate. No estamos en condiciones de realizar un balance completo, pero intuimos que de la capacidad de superar estos desafíos dependerá que los planes comunitarios se conviertan en nuevas fórmulas de participación y movilización social o en meros instrumentos de control sobre la ciudadanía.

Lo que resulta más evidente es que hoy la mayoría de situaciones a las que se enfrentan los barrios son de una enorme complejidad y exigen trabajar en múltiples direcciones e integrando formas de ver complementarias, no se puede hacer una política urbanística y de transporte sin conciencia ecologista. Y muchos de los problemas de convivencia, desde los planteados por la nueva inmigración hasta la violencia de género exigen ser tratados desde una base territorial de forma integrada. Por esto es hoy más necesaria que nunca la formación de coaliciones de movimientos que colaboren y dialoguen entre sí, y de procesos de activación y participación social que los hagan posibles, sean planes comunitarios u otras formas de actuación social. Por esto el movimiento vecinal tiene la oportunidad de abrir nuevas líneas de intervención y articulación social, y algunas experiencias positivas al respecto. Pero tiene, sin duda, que partir de la conciencia de las trampas y dificultades que debe superar por el camino

De hecho, en muchos sitios ya se han dado algunos pasos en esta dirección. Es bastante habitual la formación de «plataformas unitarias» que agrupan a buena parte de las entidades locales en torno a reivindicaciones concretas, en las que se conjugan demandas de distintos sectores sociales. Es también habitual la presencia de Asociaciones de Vecinos y Vecinas en campañas organizadas por otros movimientos (por ejemplo en plataformas de apoyo a la huelga general de 2002, la campaña contra la guerra o la oposición al Plan Hidrológico). O, al menos en Barcelona, se ha llegado a confluir en plataformas de ciudad con alternativas globales en algunos ámbitos como las pioneras Barcelona Estalvia Energia o la Plataforma del Transporte Público. Una actividad que en muchos casos no sólo significa un reagrupamiento de fuer-

zas sino también una vía para interrelacionar tradiciones culturales en la búsqueda de una nueva síntesis.

En definitiva, en la fase actual cada vez resulta más evidente que el futuro del movimiento vecinal reside en una apuesta por la profundización de los mecanismos de participación y en la búsqueda de formas flexibles de relación con el tejido asociativo y cultural de cada barrio para desarrollar un verdadero proceso de intervención y elaboración social. Los mayores retos del futuro (el medio ambiente, la superación del patriarcado, la inmigración, etc.) exigen de una capacidad de mediación y síntesis que posiblemente no era necesaria en el pasado.

Comentario final para activistas vecinales y sociales

Con toda sus contradicciones y diferencias, el movimiento vecinal ha representado una de las formas más persistentes de participación social, particularmente implantada en los barrios de clase obrera, donde la gente tiene menos capacidad financiera para satisfacer sus necesidades a través del mercado y los mecanismos de «voz» colectiva son más necesarios. Desde este punto de vista, la continuidad de un movimiento social basado en el activismo voluntario es sin duda impagable y necesaria. El problema principal estriba en la falta de efectivos militantes, el envejecimiento de muchos cuadros y, a menudo, la autolimitación en las cuestiones planteadas. El movimiento requiere sin duda una revitalización y ésta sólo puede venir de buscar nuevas formas de articulación de las redes sociales que en parte están presentes en los barrios, distritos o ciudades. Y para hacerlo posible es necesario reforzar su autonomía, su carácter reivindicativo, la búsqueda de formulas de participación democrática y el hábito del diálogo, la paciencia y la crítica. El futuro del movimiento vecinal se juega posiblemente ahí y con ello las posibilidades de seguir contando con redes de intervención social a escala de barrio.

Pero esta transición tampoco será posible si no existen contrapartes en el resto de movimientos y núcleos activistas. La pérdida de vitalidad a partir de los años ochenta no sólo se produjo por los intentos de control por parte de las Administraciones o por los errores cometidos por el propio movimiento vecinal. También porque una parte de los activistas de izquierdas optaron por trabajar desde plataformas alternativas, con menor implantación territorial (al menos en el mundo urbano). Ciertamente, el conservadurismo de muchas Asociaciones y sus dependencias con los poderes municipales explican este desapego. Pero con ello se perdieron cosas importantes. Especialmente la posibilidad de intervención a escala local, el contacto y diálogo permanente con la población no politizada (una relación a menudo frustrante y siempre

laboriosa, pero absolutamente básica si lo que se pretende es conseguir cambios sociales profundos y una verdadera participación social). El repliegue espacial de muchos movimientos sociales hacia espacios específicos ciertamente hace más confortable su trabajo, pero genera el peligro del «ghetto», la autocomplacencia y el aislamiento social. Allí donde se han mantenido núcleos organizados de otros movimientos ha sido mucho más fácil generar dinámicas más complejas e integrales. Dinámicas que en muchos casos sólo pueden hacerse desde una base territorial y desde la generación de una conciencia colectiva que la misma facilita. Por esto todos los sectores implicados en un cambio social tenemos mucho que ganar si conseguimos generar potentes redes locales con participación del movimiento vecinal.

Prosperitat, Nou Barris, Barcelona, junio 2004